

La Democracia Liberal en América Latina

Raúl Cereceda S. J.

El presente trabajo está integrado por las notas tomadas de una interesante conferencia dictada por el autor. El Rev. P. Cereceda es un prestigioso jesuita chileno, profesor de Derecho Internacional en el Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad Gregoriana.

1) Origen ideológico de la democracia.

Sea que se sostenga un concepto cristiano o laico del Estado, todos concuerdan en que el fin de la sociedad política es procurar el bien común de sus miembros. Cuando el Estado de tipo liberal dejaba un amplio margen a la actividad privada, el régimen de este Estado podía asumir una forma monocrática o aristocrática; pero, un Estado que interviene en todas las actividades ciudadanas, económicas, sociales, de estructura, ya sea que lo haga por el impulso de una doctrina o por la presente interrelación en que vive la Comunidad internacional, adquiere, necesariamente, una forma democrática, en la cual, no sólo uno —monocratismo— unos pocos —aristocratismo— sino todos deben cooperar a la consecución del bien común.

Esta es una primera constatación: el régimen democrático, en este período post-bélico, recoge la adhesión unánime de los Estados; todos los Estados de la Comunidad internacional, se proclaman democráticos. La guerra, contra el fascismo se hizo en nombre de los principios democráticos. Y en esta guerra, la demo-

cracia salió victoriosa. Esta victoria fué, para sus sostenedores, una confirmación de que la democracia es el régimen, no sólo más rico de verdad moral y de justicia, sino que es el más eficaz. Esta victoria fué, además, un desmentido a la afirmación fascista que la democracia es débil, tara las fuentes de la virilidad de los pueblos, es el reino amorfo de una masa de subhombres.

Pero, de esta afirmación democrática unánime de la post-guerra, surge otra constatación no menos fehaciente: acerca del concepto de democracia, de su naturaleza, de su realización práctica, no existe esa misma unanimidad. Todos los Estados se proclaman democráticos, pero, no todos entienden la democracia de la misma manera. Y no es una discusión simplemente académica entre las dos corrientes democráticas; es una controversia fundamental: no sólo ambas corrientes se dicen democráticas, sino que lo afirman con tal exclusivismo, que la opuesta tendencia es la negación de la democracia, o al menos, una especie adulterada.

Esta es la segunda constatación: existen dos concepciones de la democracia.

En la literatura jurídica reciben estas concepciones, diversos nombres: **democracia occidental u oriental**; designación exterior, geográfica, que nos dice sólo dónde está nubicados, en el mapa, los Estados en que vige uno u otro sistema. **Democracia liberal o socialista**, porque una insistiría más en la libertad y la otra, en el servicio de la sociedad integral. Designación imperfecta, pues las dos tendencias pretenden servir a la libertad y a la sociedad total.

Me satisface más la nomenclatura de **democracia clasista o aclasista**: la primera sostiene que la existencia de clases sociales diversas en un Estado no deroga la práctica de los principios democráticos; la segunda afirma que clase social y democracia son conceptos contradictorios. Por comodidad de lenguaje, yo usaré esta terminología de democracia clasista y aclasista, advirtiendo, como es obvio, que la sola referencia a clase social no agota el concepto de democracia.

Una tercera constatación completa el cuadro del conflicto entre las dos tendencias democráticas: ambas reclaman el mismo origen, la misma paternidad, recurren a la misma fuente filosófica originaria. Las dos corrientes nacieron simultáneamente, son gemelas; pero, mientras una empezó a actuar en el plano político, inmediatamente, y dominó el ambiente por todo el siglo XIX, la otra tuvo una vida oculta, subterránea, intelectual y no política, por más de 150 años y sólo surgió al plano político, después de la Revolución soviética de 1917, para lograr una amplísima afirmación, después de la segunda guerra mundial en Asia y Europa Oriental. Es decir, la más antigua en su realización política es la democracia clasista; la corriente nueva es la democracia aclasista.

Hechas estas tres constataciones, expondré mi tema en el siguiente orden: en primer lugar, mostraré el origen filo-

sófico de las dos corrientes, es decir, cómo es posible que de un mismo filósofo hayan surgido estas dos tendencias opuestas, este Esaú y Jacob de la democracia contemporánea; en seguida, cuál es la herencia filosófica que ha recogido la democracia clasista; para terminar con la ubicación de la democracia latino-americana dentro del ámbito democrático clasista, con sus características peculiares.

El filósofo a que hemos hecho alusión y que es saludado por ambas corrientes como su fundador es Jean Jacques Rousseau, y la obra en que expone su ideario político es "El contrato social", escrita en 1762.

La concepción política de Rousseau no es original; él es, más bien, un divulgador, el filósofo que escribe una Summa Política de las ideas sobre la sociedad que primaban en el ambiente intelectual del siglo XVIII. El problema del origen de la sociedad civil, de la autoridad, de la justificación de este binomio espontáneo de toda colectividad: gobernantes-súbditos, es remotísimo. La idea de que los hombres hayan suscrito un Contrato social había sido tratada ampliamente en el siglo XVII, por Hobbes y Locke en Inglaterra, por Grotius, en Holanda.

Pero, estos filósofos habían escrito, sobre todo, con la intención de justificar un determinado régimen político, ya fuese totalitario o monárquico liberal. Su intención era más política que filosófica. Rousseau se desentiende, explícitamente, de toda conclusión política a que puedan llevar sus ideas; actúa como filósofo puro y él hubiese sido el más sorprendido de todos, si hubiese previsto que la democracia política lo saludaría un siglo después, como su fundador. Su sorpresa hubiese llegado a un colapso nervioso, si hubiese presentido que la línea cristalina de su pensamiento, una, lógica, brillante, daría origen a dos sistemas polí-

ticos contrarios: a una democracia clasista y a otra aclasista.

¿Cuál es el punto de partida de la reflexión filosófica de Rousseau? Es la verificación del contraste profundo que existe entre el estado de naturaleza originario, en que todos los hombres eran libres e iguales y su presente condición, que los muestra en todas las naciones, como subyugados y miembros de clases radicalmente diferentes.

¿Cómo se ha producido esta deterioración de la condición humana, qué es lo que ha hecho que el hombre de libre se haya convertido en siervo? Para Rousseau, sólo existe una explicación posible: porque la humanidad ha olvidado cómo los hombres entraron en sociedad, cómo aceptaron someterse a una autoridad común. Pues bien, existe una sola vía legítima para formar la sociedad civil: un contrato aceptado por hombres libres e iguales. La sociedad civil es una asociación libremente consentida que reposa en este título: el contrato social.

Establecida esta premisa, Rousseau avanza un paso más: ¿qué es lo que ha guiado a estos hombres libres e iguales a constituir la sociedad? Para Rousseau, si los hombres quisieron salir de su estado de naturaleza originario, es porque encontraban en la organización social, ventajas superiores, de conservación, defensa contra las fuerzas hostiles de la naturaleza.

Pero, al aceptar entrar en sociedad, de ninguna manera, renunciaron a la libertad e igualdad, inherentes a su condición de hombres. Esta es la idea fundamental de todo el pensamiento roussoiano: entrando en sociedad, los hombres no renunciaron, en todo o en parte, a sus derechos naturales; los conservaron intactos. Si Rousseau fuese hoy candidato a diputado, su lema sería: "seguridad en la libertad e igualdad".

Para Rousseau, la cláusula esencial del contrato social es ésta: "la enajenación total de todos los miembros, con todos sus derechos, a toda la comunidad". Es decir, al entrar en sociedad, los hombres se entregaron, totalmente, a la comunidad con todos sus derechos. Para nosotros, esta cláusula entraña una contradicción: ¿cómo es posible conservar derechos que se enajenan? Rousseau nos responde: es precisamente, esa enajenación **total**, la mejor, la única garantía de la conservación de los derechos. Veamos, en primer lugar, respecto de la igualdad. Si la enajenación es total para cada uno, es igual para todos; en esta sala, somos una perfecta imagen de un paisaje roussoiano: si enajenamos todas nuestras prendas de vestir, quedamos todos iguales, ¿por qué? Porque la enajenación fue total para todos y para cada uno. Así, hemos preservado nuestra igualdad.

Lo mismo podemos decir de la libertad. Porque si todos somos iguales dentro de la sociedad, no hay ninguno que sea capaz de oprimir la libertad de los otros; la libertad se pierde sólo cuando existe desigualdad entre los hombres; pero, desde el momento que todos somos iguales, nadie puede oprimir a otros, siu que se oprima a sí mismo; nadie tiene, así, interés en oprimir a los otros.

Es esta idea-llave de Rousseau la que explica que pueda aparecer, para unos, como el defensor más decidido de los derechos individuales y, para otros, el propugnador más decidido del Estado sin límites, totalitario. Es esta noción de igualdad la que asegura el vínculo entre los dos polos de su pensamiento.

En una sociedad de iguales, el Estado puede ser omnipotente, porque estando todos en la misma condición, nadie puede tener interés en favorecer la injusticia o la opresión de los otros, pues él se contaría, también, entre las víctimas de esta opresión e injusticia. Es esta

concepción ambivalente de la sociedad lo que explica, en último término, que su filosofía haya dado a luz dos tendencias opuestas: una que insistía más en la afirmación de la libertad y derechos de individuo —la democracia clasista— la otra, que se aferraba a la insistencia de Rousseau en la omnipotencia del Estado —la democracia aclasista o totalitaria.

De lo que hemos expuesto hasta ahora, surge inmediatamente una objeción. Para que esta sociedad imaginada por Rousseau pueda operar, sea una verdadera sociedad, requiere una autoridad. Esto lo admitía Rousseau. Pero, el hecho de establecer una autoridad ¿no significa crear dos categorías de ciudadanos, los que están en el poder y los que deben obedecer a ese poder? ¿No significa esto, romper la igualdad entre los miembros de la sociedad? No, dice Rousseau. Porque la autoridad en la sociedad es el íntegro cuerpo social, la misma sociedad que ha nacido del acto de asociación.

Esta sociedad cuando ordena, cuando ejerce su autoridad, se identifica con la voluntad general. Es cierto que esta voluntad general tiene órganos, instrumentos para actuar, así como el cuerpo humano tiene manos, pies y corazón; pero, son meros instrumentos, miembros de un cuerpo total. Para Rousseau no tiene ninguna importancia la forma práctica que se dé a este instrumento, cuál sea el régimen político por el que actúa, se ejerce la voluntad general. Tal Estado tiene un régimen monárquico, un rey a su cabeza? Bueno, esto significa sólo, que la voluntad general actúa por una sola persona. ¿Tiene un régimen aristocrático? Significa que actúa por unos pocos. ¿Tiene un régimen democrático, Significa que la voluntad general actúa por todos los miembros de la sociedad.

Por esto les decía antes, que para Rousseau, no tiene importancia el pro-

blema político, cuál deba ser, en concreto, el régimen político más apto a su concepción filosófica. El es un demócrata puro, filosófico; lo importante para que exista una democracia es que la autoidad sea la cosa de todos, sea el mismo cuerpo social; es indiferente el medio práctico que asuma para expresar su voluntad.

No debe, por tanto, admirarnos el desprecio filosófico con que Rousseau trata ciertos aspectos de la vida democrática que, para nosotros, tienen una gran importancia. P. ej., si le preguntamos a Rousseau: ya que usted dice que la voluntad general es la que rige el cuerpo social; ¿cómo es posible conocer la voluntad general sobre un problema determinado o para elegir los gobernantes? El nos dirá: por el sufragio, concedido a todos los que son capaces de entender el contrato social. Esta es la única manera de conocer la voluntad general. Nosotros insistimos: pero, si todos los miembros son libres e iguales, el sufragio lleva a la formación de una mayoría y de una minoría. Sí. Pero, si la minoría debe inclinarse a la voluntad de la mayoría, obedecer a la mayoría, ¿cómo podemos afirmar que los miembros de la minoría son, aún, iguales a esa mayoría? Rousseau nos responde: no se trata de que la minoría deba obedecer a la mayoría, sino a la voluntad general que la mayoría ha expresado. El sufragio no tiene otro objeto que dar a conocer la voluntad general; todos los miembros de la sociedad, sean de la mayoría o de la minoría, cuando entraron en la sociedad, se comprometieron a respetar la voluntad general; una vez conocida ésta, deja de ser la opinión de una mayoría; es la opinión de todos.

Para que se haga más clara esta idea de Rousseau, ustedes pueden comparar el sufragio en la sociedad rusioniana, a lo que acontece en la elección del Papa

por el Conclave cardenalicio. Supongamos que de 70 Cardenales, 50 dieron su voto a determinado Cardenal, y el resto, a otros Cardenales. Una vez conocido el resultado, todos los Cardenales, los que votaron por el elegido y los que votaron por otros candidatos, se adelantan y presta nobediencia al nuevo Papa; sería absurdo hablar de una minoría cardenalicia, mucho más, de una oposición cardenalicia: todos considerarán como expresión de la voluntad de la Iglesia, el gobierno del Papa.

Este es, sintéticamente, el pensamiento de Rousseau. No existe oposición entre la libertad e igualdad, de una parte, y la omnipotencia del Estado, por otra parte. Si el Estado es gobernado por la voluntad general, expresada de una manera correcta, no puede existir opresión ni desequilibrio entre los diferentes grupos de la comunidad.

Pasemos, entonces, a la segunda parte, es decir, a señalar lo que constituye la herencia política de Rousseau para la democracia clasista. Por casi un siglo, a partir de la Revolución Francesa de 1789, sólo aparece a la superficie una tendencia que reclama la herencia total del pensamiento de Rousseau. Es la tendencia liberal que, reaccionando contra el absolutismo del Antiguo Régimen, insiste en todos los conceptos de la libertad proclamados por Rousseau.

El Estado liberal será, en consecuencia, políticamente débil. Su estructura se levanta en medio de una serie de limitaciones que encuentran su fundamento en el Contrato Social. En primer lugar, esta estructura debe respetar, conservar, asegurar el ejercicio de los derechos, de las libertades fundamentales del hombre. En cuanto atente contra estas libertades, la autoridad se priva de todo título para ser obedecida. En seguida, se consagra en toda su amplitud, la majestad de la ley. La ley es la expresión

de la voluntad general, porque emana de todos los ciudadanos y se elabora en beneficio de toda la Comunidad. Es por la ley y en la ley, cómo el pueblo ejerce su soberanía.

Entre estas leyes, existe una que reviste una índole peculiar, porque es la ley suprema: la Constitución. Toda nación que se considere democrática tiene que tener una Constitución, que funde las relaciones entre los ciudadanos y la autoridad y organice el poder. La Constitución es el Contrato Social aplicado a una comunidad nacional determinada; si la autoridad quiere reformar la Constitución, tiene que recurrir al pueblo; es el pueblo que, únicamente, tiene la autoridad de ratificar la reforma del pacto social.

Podemos sintetizar en pocas palabras, los caracteres de la democracia clasista:

—Respeto de los derechos individuales.

—La supremacía, el poder, reside en todos los ciudadanos.

—La ley es la expresión más fiel de la voluntad general.

—La Constitución o Ley fundamental, es el Contrato social aplicado a un Estado determinado.

2) Caracteres de la democracia latino-americana.

Todo lo que he dicho anteriormente es una Introducción a lo que debió haber sido el cuerpo principal de esta charla: la democracia en los países latino-americanos.

Dentro de las dos corrientes en que se ha dividido la concepción democrática de Rousseau, Latino-América puede clasificarse dentro de la corriente democrática clasista, liberal. Todos nuestros Estados tienen una Constitución que afir-

ma un régimen democrático, republicano; su forma puede ser federal o unitaria; se consagra un largo capítulo a las garantías constitucionales, a los derechos de la persona humana; en seguida, viene la división clásica de los poderes del Estado en Ejecutivo, Legislativo y Judicial; termina la Constitución con un párrafo acerca del procedimiento para su reforma.

Aparentemente, formalmente, no existe una diferencia radical entre una Constitución europea occidental y una latino-americana. Sin embargo, un examen más profundo o la simple observación de nuestras actividades políticas hacen advertir que detrás de una letra análoga, se esconde una realidad muy diferente.

Cuando me encuentro con profesores de Derecho, aquí en Europa, todos me repiten la misma letanía de acusaciones contra nuestra democracia: ustedes son una caricatura de democracia —tienen revoluciones, al menos, mensuales— las libertades son formalistas, existen para un pequeño grupo de potentados, pero no para un pueblo analfabeto que vive al margen de toda vida democrática —existen sólo dos poderes organizados, el Ejército y la Iglesia, que intervienen, ambos, justamente, en lo que no tienen ningún título para intervenir: la política— los partidos políticos son montañas personalistas que se agrupan alrededor de un caudillo ambicioso y sin escrúpulos, etc. etc.

Esta es una opinión generalizada que existe acerca del ejercicio de nuestra democracia: tenemos constituciones democráticas, pero, gobiernos anti-democráticos. E inmediatamente, agregan la comparación nostálgica: ¿por qué no tienen ustedes una democracia como la de Estados Unidos? No se independizaron casi al mismo tiempo; Estados Unidos, a fines del siglo XVIII, y América Latina, a principios del siglo XIX?

En resumen, existe una verdadera impaciencia acerca de la lentitud de nuestro progreso democrático. Expondré, brevemente, algunas de las causas de este retardo, comparando nuestro sistema democrático con el que rige en los Estados Unidos. Naturalmente, que al hablar de América Latina, ya que hablo a latino-americanos, no necesito insistir en los matices diferenciales que van de Estado a Estado.

Reduciré estas causas a cuatro:

1) **Impreparación para la vida democrática o inmadurez cívica latino-americana.**

2) **Función preponderante del Presidente de la República.**

3) **Proceso electoral deficiente.**

4) **Rol político de las Fuerzas Armadas.**

Además, podrían agregarse como causas, la infraestructura social-económica de gran parte del Continente y el influjo imperialista de los Estados Unidos; pero, no me detengo en su explicación, ya que sería necesario entrar en muchos detalles de sociología política y de nuestras relaciones político-económicas con los Estados Unidos.

1) **Impreparación para la vida democrática o inmadurez cívica latino-americana.**

Los Estados Unidos se independizaron de Inglaterra en 1776; pero, esta fecha representa el término de un proceso de independencia que había empezado 200 años antes; en estos 200 años, las colonias norteamericanas conocieron el gobierno autónomo, asambleas legislativas propias, jueces independientes de las cortes inglesas. Existía un Gobernador que representaba el poder inglés y que recordaba que esas colonias tenían un

vínculo político con la Metrópoli; gobernador cuyos poderes efectivos eran muy limitados con respecto a las libertades de que gozaban los colonos.

Durante estos 200 años, los colonos conocieron todos los procesos de una verdadera democracia: elecciones libres cada 2, 4, 6 años, de diputados, jueces, alcaldes, etc.; respeto máximo de las libertades ciudadanas; no podía ser de otra manera, ya que esos colonos habían venido a esas tierras vírgenes, porque no encontraban libertad en Europa. De manera que cuando llegó ese año 1776, las colonias tenían una preparación bicentennial para la independencia; fué, se puede decir, la interrupción de un vínculo jurídico de dependencia que ya no respondía a una sujeción real; fué la llegada a la mayor edad de un hijo de familia que, gradualmente, tiene una participación en los negocios de su padre, cuya opinión es oída en el consejo de familia; en resumen, a quien se le ha dado una responsabilidad.

Es cierto que, al principio, las antiguas colonias tuvieron alguna dificultad para encontrar una vía de gobierno común; pero, esto no fué por falta de preparación, sino que por exceso de preparación, de autogobierno, por lo que cada Estado—Maryland, Maine, Virginia—no quería reemplazar la vaga autoridad de una lejana Inglaterra, por un poder central fuerte muy cercano, establecido en una ciudad, como sería la futura Washington.

Muy diversa es la situación de América Latina a fines del siglo XVIII. No había oficio de alguna importancia que no estuviese en manos de los españoles: virreyes, gobernadores, alcaldes, corregidores, jueces. No existían asambleas

legislativas criollas; los procesos judiciales, después de la primera instancia en el territorio de la colonia, emprendían el largo viaje a España y, a veces después de 5 ó 10 años, el colono podía recibir satisfacción en su demanda.

En estas condiciones, repentinamente, nos llegó la independencia cuando menos lo pensábamos. Una guerra que no nos interesaba, una invasión de Napoleón a España, que desterró a la familia real y esta interrupción de todo vínculo con la Madre Patria, crearon la necesidad de improvisar instituciones, para las que no teníamos ninguna preparación. Algunos criollos respetables que habían hecho viajes de estudio a Europa y Estados Unidos sabían algo, en un plano teórico, de lo que era el auto-gobierno. Ellos enseñaron cómo había que formar Juntas de gobierno, cabildos, cortes de justicia, copiando procedimientos que superaban nuestra capacidad política. Pero, en cada colonia estos patriotas eran un *mínimum* insignificante de la población; después, con la misma improvisación, se formaron ejércitos, con los peones de los fundos, para defender las incipientes instituciones.

Esta impreparación, esta inmadurez debían ser fatales para nuestro proceso democrático. Fueron los caudillos victoriosos, los que llegaron al poder, adoptaron constituciones que cambiaban después de meses de inaplicación, para reempezar el proceso constitucional, que sólo quería dar una apariencia de legalidad. Esta perpetuación del caudillismo debía ser una causa crónica, por casi un siglo, que impediría llegar a una concepción orgánica, estructural, no personal, de la autoridad.

2) P. ej., la función preponderante del Presidente de la República.

El Presidente de la República es, generalmente, la continuación constitucional de un caudillo. La frase que pronunció, nostálgicamente, el mariscal Sucre en 1825, permanece tristemente célebre: "Hemos librado nuestras patrias de la Metrópoli; ahora, tenemos que liberarlas de sus libertadores". Esta independencia ha sido más difícil de conseguir que la primera.

No se da en el mundo un individuo que tenga más poder constitucional que un Presidente de la República en América Latina. Es elegido por sufragio universal, directamente por el pueblo; no tiene el contrapeso de un Poder Legislativo responsable e independiente de su autoridad; el veto presidencial, en algunos casos, es absoluto, de manera que aprobada la ley por las dos Cámaras y rechazado por el Presidente, el Parlamento no puede insistir y la ley no pasa.

¿A qué se debe esta preeminencia del Jefe del Estado en Latino-América? Una de las causas es el influjo de las Fuerzas Armadas. Un Presidente en nuestro Continente, puede gobernar sin el apoyo, con el apoyo del ejército, pero, casi nunca, contra el parecer del ejército. En seguida, a que no se conoce el régimen parlamentario y los Ministros de Estado son, simplemente, secretarios del Presidente, que éste puede cambiar a voluntad. Si no se conoce el régimen parlamentario, se debe a que no existen partidos políticos organizados, disciplinados, que propongan aplicar una doctrina del bien común; son, eminentemente, personalistas. Es este culto de la personalidad el que hace que un elector vote por un hombre, más que por una doctrina o un partido. Esta tradición de poder perso-

nal está tan arraigada en las costumbres que constituye un elemento fundamental de la supremacía presidencial. Sus atribuciones son tan extensas que, sin tener necesidad de salirse del marco de la ley, lo convierten en un dictador legal.

3) Proceso electoral deficiente.

El analfabetismo de una gran parte de la población, su ignorancia de los complejos problemas de un Estado moderno, la consiguiente apatía política, contribuyen a que el proceso electoral sea, generalmente, viciado. Una elección no es la expresión honrada de la voluntad de la mayoría de los ciudadanos. El cohecho se practica en larga escala. Un candidato tiene más interés en contratar eficientes agentes electorales, que en convencer a una masa ignorante de campesinos, acerca de la bondad y eficacia de su próximo gobierno.

Además, como el gobierno en funciones protege a un candidato que asegure su continuismo, no sólo la libertad de la oposición encuentra muchas trabas, sino lo que es peor, la falsificación del resultado de las urnas aparece como un agregado normal al proceso electoral.

Un profesor de Derecho Constitucional comparado de la Facultad de Leyes de Londres, explicando los sistemas electorales de América Latina decía que, en estos países, muy católicos, se celebra dos veces al año el Día de los Difuntos: el 2 de Noviembre, en que los vivos van al cementerio a visitar a los muertos y llevarles flores y oraciones; y el día de las elecciones, en que los muertos van a las urnas y votan por los vivos.

Es esta una exageración evidente; pero, indica la opinión generalizada de que los procesos electorales en América del Sur carecen de seriedad.

4) Rol político de las Fuerzas Armadas.

Decíamos, hace poco, que las Fuerzas Armadas son uno de los principales sostenes de la autoridad del Presidente de la República. En los primeros tiempos de la Independencia, América Latina conoció sólo dictaduras militares, la era de los caudillos, apoyados en cuerpos de ejército y que, socialmente, estaban al servicio de la aristocracia terrateniente. Si el siglo XIX vió en su segunda mitad, una evolución marcada hacia un liberalismo político, el proceso democrático parece haber sufrido una estagnación en la primera mitad de este siglo y un aumento creciente de los gobiernos militares o de civiles dominados por militares.

Este rol político de las Fuerzas Armadas es un factor muy significativo en el retardo de nuestra educación democrática. Otras naciones pueden conocer militares en el poder, como es, p. ej., el general Eisenhower, Presidente de los Estados Unidos. Pero, Eisenhower, no es el hombre del Ejército, del Pentágono, sino de la nación; subió al poder apoyado por un partido político; más aún, solicitado para que también fuese su candidato. Sería impensable en Estados Unidos, que en caso de conflicto entre el Ejecutivo y el Congreso, el Presidente recurriese a los cuarteles para imponer su voluntad.

En América Latina, es un hecho que un conflicto de esta naturaleza se resuelve, en último término, por la decisión de las Fuerzas Armadas; esta idea se confirma más aún, con el ejemplo de los dictadores de la post-guerra, Perón en Argentina y Vargas en Brasil. Es cierto que durante su administración contaron con un amplio y sincero apoyo popular; pero, llegado el momento de la decisión, la última palabra en los dos casos, la tuvieron las Fuerzas Armadas.

Quisiera terminar, haciendo una última observación acerca de la inestabilidad gubernativa en América Latina. Se repite que nuestra América es la tierra de las revoluciones. Yo creo, sin embargo, que en América del Sur ha habido no más de dos o tres revoluciones en un siglo y medio, para todo el Continente; pero, en cambio, ha habido muchísimas revueltas, cuartelazos y golpes de Estado. La diferencia entre revuelta y revolución es clara.

Cuando un grupo militar, tenga o no apoyo popular, está insatisfecho por pretendidos abusos del poder y usa la fuerza para derribarlo, provoca una revuelta. En cambio, cuando la opinión pública, tenga o no el apoyo de las fuerzas armadas, está insatisfecha de las instituciones que fundan el poder y que no permiten su propia modificación por vías legales, usa la fuerza para cambiar esas instituciones, entonces, tenemos una revolución. Siempre una revolución importa un cambio en las instituciones políticas, con la intención ulterior de provocar un cambio de estructuras económicas y sociales. Una revuelta es un cambio de personas o de dirección gubernativa, sin que implique una renovación institucional. Por esto, afirmo que en América Latina hemos tenido poquísimas revoluciones y muchísimas revueltas.

La revuelta es un fenómeno, no sólo anti-jurídico, sino también, anti-político. La política, en su misma naturaleza, presupone la ausencia de fuerza, de violencia. La Solución política de un conflicto entre poderes es, esencialmente, pacífica en sus medios. La carencia de una vida política fecunda hace que se recurra a la fuerza para obtener resultados inmediatos en que generalmente, no están envueltos elementos doctrinarios, sino ambiciones personalistas.

Aquí tocamos un punto delicado de nuestra corrupción política. ¿Qué sucede en una nación madura, políticamente p. ej. Inglaterra o Estados Unidos, cuando en una elección es derrotado un partido político. Ese partido se constituye oficialmente en oposición, sus miembros vuelven a sus actividades privadas, a sus negocios y esperan, pacientemente, hasta la próxima oportunidad electoral para tratar de obtener el poder. En América Latina, la actividad política es un verdadero negocio, una industria floreciente, que importa beneficios personales y familiares enormes. Perder el poder significa perder una fuente de ingresos económicos, cesantía, que es trágica para personas que no tienen otra profesión que la política. Esta circunstancia impide el ejercicio de la virtud de la paciencia constitucional, que pide esperar 5 ó 6 años hasta la próxima consulta electoral.

De todo lo que he expuesto anteriormente acerca de la práctica de la democracia latino-americana, quisiese que mi conclusión fuese realista. Creo firmemente que América Latina será democrática, dentro de sus propias peculiaridades. Somos latinos en nuestra gran mayoría, raza capaz de un gran esfuerzo creativo intelectual, pero, de posibilidades limitadas en el campo de la acción.

Ahora bien, la política es ciencia en pequeña parte y arte, en máxima proporción. La democracia en su ejercicio concreto, requiere una madurez política, no de un grupo, sino de todos los miembros de la comunidad nacional que nosotros aún no hemos alcanzado. Este proceso de madurez es, necesariamente, lento, porque es un proceso de educación; no se puede acelerar por la fuerza, una ley o un decreto. Debe cultivarse sin descanso, con mucha perseverancia por generaciones.

T A N D A S D E E J E R C I C I O S

durante el mes de Junio de 1957

- * MATRIMONIOS: días 7, 8 y 9 (viernes de 19 a 21 hs.; sábado y domingo de 8.30 a 18) dirigidos por el P. Pedro C. P., en Arroyo 917, Capital. Inf. e Inscip.: 792-5029.
- * SEÑORITAS: 15 de 8 a 18 (DÍA DE RETIRO, tercer sábado) en Charcas 3586 (Colegio del Divino Corazón), Capital. Inscip. e Inf.: H. Yrigoyen 2005; T. E. 48-7051.
- * CABALLEROS Y JOVENES: DÍA DE RETIRO, el 16 (tercer domingo) en el Colegio del Salvador, Callao 542, Capital; de 15 a 18.30 hs.
- * OBREROS: del 21 al 23 a las 19, en Villa San Ignacio (San Miguel) dirigidos por el P. Pizzariello S. J. Inscip. e inf.: H. Yrigoyen 2005; T. E. 48-7051
- * EMPLEADAS: del 28 al 30 a las 19 en Rivadavia 22401 (barrera 80), ITUZAINGO, dirigidos por el P. Pizzariello S. J. Inscip. e informes: H. Yrigoyen 2005, Capital. T. E. 48-7051

Para informes: HIPOLITO YRIGOYEN 2005, CAPITAL

Lunes a viernes de 8.30 a 12 hs. y de 14.30 a 20 hs. Sábados de 8.30 a 12

T. E. 48 - 7051

BUENOS AIRES